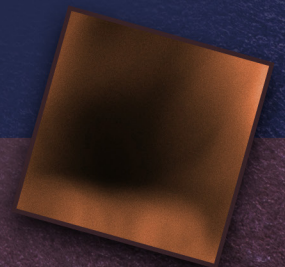
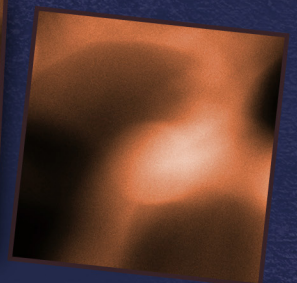
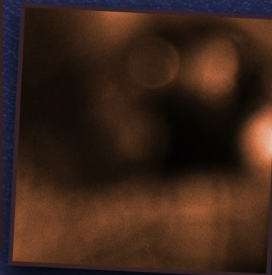


PROMESAS ROTAS

Límites de la Orden Ejecutiva de Biden
sobre Prisiones Privadas



DETENTION
WATCH NETWORK



RESUMEN EJECUTIVO

Como candidato presidencial, Joe Biden prometió poner fin al uso de prisiones privadas para el encarcelamiento a nivel federal y la detención de inmigrantes, sosteniendo “que el gobierno federal no debe usar instalaciones privadas para ninguna detención, incluyendo la detención de inmigrantes indocumentados”¹. Este informe proporciona un resumen del progreso hacia esa promesa incumplida y describe los pasos que la administración debe tomar para poner fin al uso federal de prisiones privadas y gradualmente eliminar por completo el uso de la detención de inmigrantes.

El 26 de enero de 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva para eliminar gradualmente las prisiones privadas federales. La orden² prohibió la renovación de contratos para las prisiones del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) operadas por entidades privadas, que incluyen las instalaciones de la Oficina

Si bien las prisiones privadas representan menos del 10% de la suma total de cárceles y prisiones de EE. UU., las prisiones privadas detuvieron al 79% de las personas en detención migratoria en septiembre de 2021.

1. [The Biden Plan for Strengthening America's Commitment to Justice.](#)

2. [Exec. Order No. 14006: Reforming Our Incarceration System to Eliminate Privately Operated Criminal Detention Facilities, 86 Fed. Reg. 7483 \(effective Jan. 29, 2021\).](#)



de Prisiones (Bureau of Prisons, BOP) y Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals, USMS), pero fallo al excluir centros de detención privados operados por Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), los cuales operan bajo el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). Si bien las prisiones privadas representan menos del 10% de la suma total de cárceles y prisiones de EE. UU.³, las prisiones privadas detuvieron al 79% de las personas en detención migratoria en septiembre de 2021.⁴

La implementación de la orden ejecutiva dentro del DOJ ha sido inconsistente y, en algunos casos, contraria a los objetivos declarados por Biden. A medida que el gobierno elimina gradualmente algunos contratos de USMS y la BOP con empresas privadas de prisiones, otros se han ampliado para permitir la negociación de acuerdos intergubernamentales para mantener cárceles privadas o convertidas en centros de detención de ICE.

La orden ejecutiva ordena al DOJ de manera específica a no renovar cualquier “contrato con centros de detención criminal operados de forma privada”. Cinco contratos de prisiones privadas de la BOP para prisiones segregadas con “requisitos de delincuentes extranjeros” (Criminal Alien Requirement, CAR) se cancelaron con otras seis prisiones CAR preseleccionadas para cerrar en noviembre de 2022. Sin embargo, USMS solo ha rescindido dos contratos directos con compañías penitenciarias privadas y está buscando nuevos acuerdos que “pasan” para ampliar la privatización. Además, varios contratos de USMS privatizados tienen una duración

3. Prison Policy Initiative, [Mass Incarceration: The Whole Pie 2020](#) (March 24, 2020).

4. En septiembre 2021, un reporte de ACLU encontró que el 79% de todos los inmigrantes en detención son retenidos en prisiones privadas, apenas por debajo del 81% de enero 2020. Lee ACLU, [More of the Same: Private Prison Corporations and Immigration Detention Under the Biden Administration](#) (Oct. 5, 2021).



indefinida y, por lo tanto, pueden seguir vigentes a pesar de la orden ejecutiva.

En septiembre de 2021, ICE anunció la reapertura de una prisión que era de la BOP en Moshannon Valley, Pensilvania, como una instalación de ICE. Han surgido informes de que los gobiernos locales y las corporaciones penitenciarias privadas están en conversaciones para convertir prisiones privadas adicionales contratadas por el Departamento de Justicia en centros de detención de ICE. Estos esfuerzos se están llevando a cabo en instalaciones que incluyen el Centro de Detención de West Tennessee y el Centro de Detención de Leavenworth en Kansas, donde los gobiernos locales están negociando acuerdos de servicios intergubernamentales (Intergovernmental Service Agreements, IGSA) para convertir las instalaciones en centros de detención de ICE. ICE no ha hecho comentarios públicos sobre estas negociaciones, lo cual ha generado preocupaciones de que puede estar negociando en otros lugares con poco o nada de transparencia.

Además, según consta ICE está en un proceso extenso de negociaciones de contratos con centros de detención privados, incluyendo el Centro de Transición de Broward del Grupo GEO en Florida y el Centro de Procesamiento del Condado de Otero del Management Training Center en Nuevo México.

No es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Lxs que hacen abogacía y lxs que han sido afectadxs directamente por el sistema lo han dejado claro, la detención pone en gran riesgo la vida y el bienestar de las personas, agrava las crisis humanitarias, viola principios de derechos humanos y es cruel e innecesaria. La criminalización de la migración y el encarcelamiento de migrantes deben ser terminados. Como primer paso, la administración de Biden debe



alinearse con estados a lo largo de todo el país que prohíben el encarcelamiento con fines de lucro. También debería eliminar el uso de la detención en el sistema de inmigración y garantizar que la orden ejecutiva sobre las prisiones privadas se siga tanto al pie de la letra y en términos de principios, ampliando la orden para incluir la detención de inmigrantes.

Específicamente, le pedimos a la administración de Biden que:

1. Comience a eliminar completamente el uso de la detención de inmigrantes por medio de la liberación de personas en detención, cancelando contratos de detención de ICE, negándose a renovar contratos e interrumpiendo todos los esfuerzos de expansión.
2. Implementar completamente la orden ejecutiva que elimina gradualmente las prisiones operadas por el Departamento de Justicia. Permitir que los contratos existentes expiren y asegurarse de que no se renegocien como acuerdos intergubernamentales o con ICE como centros de detención de inmigrantes.
3. Ampliar la orden ejecutiva para que incluya los contratos de ICE con corporaciones penitenciarias privadas y gobiernos locales.
4. Parar inmediatamente la intervención por medio de litigación contra las leyes estatales que prohíben el uso de prisiones privadas en California y otros estados.
5. Reducir los fondos alocados para la detención de ICE por 50 por ciento en la propuesta de presupuesto del presidente para el año fiscal 2023.
6. Restaurar el acceso a asilo en la frontera sin el uso de la detención mediante la revocación inmediata de MPP y la terminación del Título 42.





DETENTION
WATCH NETWORK



AGRADECIMIENTOS

Este reporte fue una colaboración entre Detention Watch Network y Project South. Setareh Ghandehari, Bob Libal, y Priya Sreenivasan fueron los autores principales con la investigación dirigida por Bob Libal y Priya Sreenivasan.

Ediciones invaluablees fueron provistas por Steph Guilloud, Azadeh Shahshahani, Silky Shah, y Stacy Suh.

Diseño

Martyn Andrés Bonaventura

Imagen de tapa

Steve Pavey

Traducción del Resumen Ejecutivo

Félix Acuña Olivos

Gabriela Marquez-Benitez

www.detentionwatchnetwork.org

www.projectsouth.org

© Copyright 2021